

C.A. de Santiago

Santiago, catorce de enero de dos mil veintidós.

Al escrito folio 17: a lo principal y primer otrosí, téngase presente; al segundo otrosí, a sus antecedentes.

A los escritos folios 18 y 19: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

A los escritos folios 20 y 21: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Rodolfo Isaac Noriega Cardo, refugiado, a favor de Thiede Francois, quien interpone acción de amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber incurrido en un acto ilegal al negar ingresar al país, desconociendo su condición de residente y negándole el derecho a solicitar refugio.

Expone que el amparado arribó al país procedente de Haití, retornó a Chile, país donde reside, a fin de retomar su cotidianeidad, particularmente seguir viviendo con su grupo familiar, ejercer sus actividades laborales, pero a la vez para resguardar su integridad y vida, esto último dado la crisis general que sucede en su país natal.

Refiere que por razones particulares viajó fuera del país, particularmente buscar una oportunidad para su familia, salió por estado de necesidad hacia los EEUU desde donde fue expulsado hacia Haití, donde nunca tuvo intención de quedarse, por ello una vez ocurridas las posibilidades de retornar a Chile resolvió hacerlo arribando al país el 31 de diciembre pasado, siendo impedido de ingresar por parte de los funcionarios policiales quienes desconocieron las circunstancias particulares de su viaje de



retorno, los vínculos de familia y los motivos humanitarios en los que basa su intención de solicitar refugio en el país.

Relata la situación crítica de Haití, en lo que respecta la acogida que en un primer momento tuvieron sus ciudadanos por parte de EEUU, a su posterior deportación; los episodios de violencia que vivió el Embajador de Chile en ese país, y las advertencias de Chile para los viajes a esa nación.

Explica que dejó sentado ante los funcionarios policiales, en su escaso español, que retornaba a Chile, además de tener los arraigos señalados, por el riesgo a su integridad y vida en su país de origen Haití, ello al no existir una institucionalidad capaz de brindarle a cualquier persona la más mínima protección, así como en encontrándose en complejas condiciones de subsistencia básica, expresando las razones humanitarias expuestas y su intención que Chile lo proteja, en el fondo inequívocamente su intención de solicitar refugio.

Acusa que los funcionarios de la Policía de Investigaciones le negaron el ingreso, se le mantuvo detenido en una zona específica bajo coacción, se le retuvieron sus documentos de identidad y se le señaló que lo expulsarían del país por infringir las leyes migratorias.

Señala que en esa oportunidad presento una solicitud de permanencia definitiva en trámite y un comprobante de pago de multa, para demostrar su intención de ingresar de forma regular a Chile, lo que no fue considerado por la policía.

Alega que la Policía de Investigaciones, ante la inexistencia de protocolos adecuados para ingresar al país, actúa a arbitrio, atribuyéndose la potestad de discernir si corresponde o no el ingreso de las personas, siendo que su competencia es de control de identidad, inclusive se arroga la facultad de analizar una



petición de refugio, atribución exclusiva del Subsecretario del Interior, de la misma manera la Policía actúa unilateralmente sin plantear o coordinar con la autoridad administrativa que no es otra que el Ministerio del Interior, negando arbitrariamente el ingreso y derecho a pedir refugio o asilo en la frontera, las detienen y las expulsan sin orden de las autoridades competente.

Todo lo anterior, afirma, vulnera el artículo 19 N° 7 de la Constitución.

Destaca lo previsto en el artículo 26 de la ley 20430, 36 del Decreto 837, lo irregular de la actuación de la policía, citando jurisprudencia; lo previsto en la Declaración de Cartagena Sobre Refugiados, principio de impedimento de devolución respecto de los derechos de los refugiados y el derecho a pedir refugio.

Previas citas legales, solicita que se restablezca el imperio del derecho y se disponga que se le permita el ingreso al país afectos de prosiga con el trámite de su permiso de permanencia definitiva y de que formalice su solicitud de reconocimiento como refugiado.

Segundo: Que evacúa informe la recurrida Policía de Investigaciones, señalando en primer término la normativa pertinente que la faculta controlar el ingreso y egreso de los extranjeros e impedir que entren o salgan del territorio nacional personas que no cumplan con los requisitos establecidos.

Luego, refiriéndose a los hechos denunciados en el libelo de amparo, expone que al momento de efectuar su control migratorio de entrada al país, se verificó que el pasajero no poseía visa de residencia en Chile, siendo su condición de turista, requiriendo para su nacionalidad un visto de turismo que debió obtener en alguna representación consular previo a su viaje a nuestro país y



que tal exigencia se encuentra prescrita en el artículo único del Decreto N° 776 - 2018 / Interior que cita.

Agrega que el amparado, al ser consultado en el sistema B-3000, del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue beneficiario en Chile de una visa de residencia temporaria la que fue otorgada el 05.JUN.020 por un año, caducando el 05.JUN.021, sin trámites posteriores de prórrogas ni otras solicitudes, por lo que se le aplicó la prohibición de ingreso descrita en el numeral 7, del artículo 15 del D.L 1094.

Afirma que no consta que se haya efectuado el respectivo requerimiento de refugiado en la forma y ocasión, conforme los términos señalados en el artículo 36 del Decreto N° 837, del año 2010, del Ministerio del Interior, lo que se verifica en el formulario de evaluación de pasajeros, que es desarrollado por oficiales del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Aeropuerto, ocasión en la que el amparado, manifestó de forma voluntaria lo siguiente; “Fui residente temporario en Chile desde 2018, estuve irregular desde el 27 de febrero del 2019, no realice tramite alguna para regularizar mi situación, viaje con destino a México para entrar posteriormente a Estados Unidos, además hago mención que salí en el mes de mayo de forma ilegal por las cercanías del paso Chacalluta en Arica.”

Manifiesta que actualmente el amparado se encuentra en la terminal internacional, en la zona de tránsito de pasajeros, con acceso a servicios higiénicos y de alimentación, lo que es proporcionado por la compañía aérea Sky Airlines, en cumplimiento al Decreto N° 232/2014 Transporte y Telecomunicaciones “Reglamento del Facilitación del Transporte Aéreo Internacional”, debiendo proveer de los cuidados y



mantención necesarios para los pasajeros en situación de reembarco.

Tercero: que, evacuando el informe la recurrida Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señalando en primer lugar, respecto de la situación migratoria del amparado, que mediante Resolución Exenta N° 522, de fecha 08 de febrero de 2018, la Gobernación Provincial de Maipo, otorgó visación temporaria a extranjero, vigente por el plazo de un año. Que posteriormente el extranjero solicitó permanencia definitiva en nuestro país, siendo la misma rechazada mediante resolución exenta n° 107.209, de fecha 05 de junio de 2020, a causa de no haber pagado los derechos correspondientes, empero, que en ese mismo acto administrativo, la autoridad otorgó permiso de residencia temporaria con un plazo de vigencia de un año. Afirma que dicha visación nunca fue estampada, de manera que nunca fue válida, ya que el estampado de la visación en el pasaporte, o la descarga del estampado electrónico, es un requisito sine qua non para su validez, por lo que concluye, que su situación en el país es irregular.

Afirma respecto de alguna solicitud de refugio, que no se encontraron antecedentes, ni consta alguna solicitud de refugio por escrito que haya sido recibida en la oficina de partes del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ni que diga relación con el procedimiento administrativo de refugio regulado en la Ley N° 20.430 y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 837.

Agrega al respecto que esa autoridad guarda un estricto y completo registro de todas las atenciones de extranjeros que



realiza, por lo tanto, si el extranjero hubiese concurrido a extranjería en alguna ocasión, tendrían registro de ello.

Continúa detallando el marco legal pertinente a la materia, destacando la ley 20.430 y su reglamento, la ley 19880 de manera supletoria, Decreto Supremo N°837.

Manifiesta que de acuerdo a la situación migratoria del amparado, lo que correspondería entonces es que recurriera a aquella facultad consagrada en el artículo 91 n°8 de la Ley de Extranjería, el Decreto Ley N° 1.094, y que fija de manera especial la atribución del Ministro del Interior para disponer la regularización de aquellos extranjeros que hubieren ingresado de manera irregular a nuestro país o que residan en esa calidad en la actualidad.

En cuanto a la supuesta vulneración a las garantías constitucionales alegada por la recurrente, luego de reiterar lo previsto en la ley 20430 y Decreto N°837, relativos al inicio y formalización de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, expresa que al amparado pretende subsanar su situación migratoria irregular intentando ampararse en una eventual omisión por parte de esta autoridad, y en razón de no existir antecedentes verbales o escritos que se refieran a alguna solicitud de refugio, estima que no existen normativos que sustenten de manera alguna la pretensión de la recurrente en el recurso de marras, por lo que en consecuencia, tampoco existe acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías incoadas por el amparado, no siendo la acción procedente ni la condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de amparo es un arbitrio de naturaleza excepcional, que encuentra su origen y fuente en la



Constitución Política de la República y persigue por su intermedio tutela de parte de los Tribunales Superiores de Justicia, en los casos que una persona, por un acto ilegal o arbitrario, sufra cualquiera privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

Quinto: Que como primera cosa debe señalarse que la autoridad competente para el control de fronteras es la Policía de Investigaciones que tiene dentro de sus competencias el control de ingresos y egresos de la frontera del territorio nacional. Así lo indica el Decreto Ley N° 1.094, en su artículo 10, que señala que corresponderá a la Dirección General de Investigaciones controlar el ingreso y salida de los extranjeros y el cumplimiento de las obligaciones que este decreto ley les impone, como asimismo, denunciar ante el Ministerio del Interior las infracciones de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las demás medidas señaladas en este decreto ley y en su reglamento.

En aquellos lugares en que no haya unidades de Investigaciones, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones.

Sexto: Que por su parte, el Decreto N° 776 del Ministerio del Interior, de 9 de abril de 2018 señala: “Dispóngase, como requisito para el ingreso al país con fines de recreo, deportivos, religiosos u otros similares, la obtención de Visto Consular de Turismo Simple con derecho a ingreso y permanencia en Chile en tal calidad, por el periodo legal que corresponda, a todo ciudadano haitiano que desee ingresar al país, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas”.

Pues bien, lo cierto es que el amparado intentó ingresar al territorio nacional sin contar con el documento previamente indicado.



Por otra parte, no existe ningún antecedente que dé cuenta de que haya efectivamente requerido refugio en Chile.

Séptimo: Que luego de lo dicho, lo cierto es que tal como se colige de los antecedentes allegados al expediente, especialmente lo informado por la Policía de Investigaciones y el Departamento de Inmigración, resulta indiscutido que el control de ingreso al territorio nacional y las medidas adoptadas por funcionarios de Policía Internacional respecto del amparado y que se impugnan por esta vía fueron efectuadas por autoridad facultada para disponerlas –artículo 5 D.L. 2.460 -, en un caso previsto por la ley –artículos 15 N° 7 del D.L. 1.094 y único del Decreto 776 del Ministerio del Interior-, con observancia de las formalidades legales y existiendo mérito que las justificó, situación que descarta cualquier ilegalidad de parte de las instituciones recurridas, por lo que indefectiblemente se desestimaré la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre tramitación de la presente acción cautelar, **se rechaza** el recurso de amparo interpuesto en favor de don Thiede Francois.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Amparo-25-2022.

En Santiago, catorce de enero de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





XLRLPGZR

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V., Ministra Suplente Doris Ocampo M. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, catorce de enero de dos mil veintidós.

En Santiago, a catorce de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

